



AL SERVICIO DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ SOCIAL
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL.**

Medellín, trece de octubre de dos mil veintiuno.

PROCESO: Verbal (Responsabilidad Civil Extracontractual)

DEMANDANTE: Jesús Emilio Buriticá Gallego y otros.

DEMANDADO: Nódier Mónica González Benavides y otros.

PROCEDENCIA: Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín.

C.U.D.R.: 05001 31 03 007 **2019 00141-01**

Rdo. Interno: 054-20

PROVIDENCIA NRO. 019/21

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de los demandantes, contra la sentencia proferida por el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, en audiencia celebrada el día 22 de septiembre de 2020, al interior del proceso VERBAL (Responsabilidad Civil Extracontractual) promovido por los señores JESÚS EMILIO BURITICÁ GALLEGO, LUZ ADRIANA PARIAS GAVIRIA, EDID YURLIER BURITICÁ PARIAS, YEFERSON BURITICÁ PARIAS, EIDER SANTIAGO BURITICÁ PARIAS y MIGUEL ANGEL BURITICÁ en contra de NODIER MÓNICA GONZÁLEZ BENAVIDES, LUIS ADRIANO OROZCO

BEDOYA y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA, la cual procede a desatarse en los siguientes términos:

1.0. ANTECEDENTES.

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Manifestó el apoderado de los demandantes que el 13 de abril de 2016, en la Carrera 42 No 75 - 193 del municipio de Itagüí (Antioquia), circulaba JESÚS EMILIO BURITICA GALLEGO, quien conducía la motocicleta de placas GXH 83 D. Que en el mismo sentido circulaba NODIER MONICA GONZALES BENAVIDES, conduciendo el vehículo de placas DLY 209, quien por realizar una maniobra de adelantamiento al señor JESÚS EMILIO BURITICA GALLEGO, sin respetar las señales de tránsito, giró hacia la derecha colisionando contra la motocicleta.

Señaló que en dicho accidente se le produjo al señor JESÚS EMILIO BURITICA GALLEGO, fractura de tibia, por lo cual debió ser intervenido quirúrgicamente para introducir material de osteosíntesis; y adicional a ello quedaron en su cuerpo cicatrices ostensibles de más de Tres (3) metros en su pierna izquierda, lo que generó una merma de la capacidad laboral del Veinticuatro con Ochenta (%24,80), la cual debe ser tenido en cuenta para el momento de liquidar el lucro cesante.

Expresó que el señor JESÚS EMILIO BURITICA GALLEGO. se desempeñaba como oficial de la construcción de manera independiente,

labor por la que percibía unos ingresos mensuales de un millón quinientos mil pesos mensuales (\$1.500.000.00), y que no pudo desempeñar durante ocho (8) meses.

Dijo que, como consecuencia del tiempo que no pudo laborar, debió acudir a préstamos y ayudas facilitadas por el señor JAIRO RESTREPO RESTREPO, quien además de prestar el servicio de transporte por los meses en que estuvo incapacitado, facilitó los dineros para el pago de los arrendamientos de dichos meses y para el mercado y demás situaciones inherentes para la manutención y cuidado de su hogar, lo cuales ascienden a la suma de ocho millones de pesos (\$8,000.000.00).

Adujo que las cirugías realizadas, la incertidumbre frente a una operación con anestesia general, las dolorosas y largas terapias practicadas, la zozobra por deber el dinero que gentilmente le habían facilitado, etc, generaron en el señor BURITICA GALLEGO grandes aflicciones, muchas de las cuales aún persisten, pues su fisonomía ha cambiado y debe dinero al señor JAIRO RESTREPO RESTREPO y a otras personas, lo que hace que su moral se vea afectada y afecte su entorno familiar.

Advirtió que el señor JESÚS EMILIO BURITICA GALLEGO, debido al accidente ha perdido movilidad en su cuerpo, lo que le impide realizar labores como caminar, nadar, bailar, montar en bicicleta, hacer esfuerzos levantando peso (vital para el trabajo que desempeña), esto unido a que su fisonomía cambió con el accidente, pues en sus piernas se notan las cicatrices dejadas por el accidente, lo que lo ha llevado a perder autoestima y convertirse en una persona triste y que siente que le fue arrebatada la tranquilidad suya y de su familia.

Refirió que el señor JESÚS EMILIO BURITICA GALLEGO contrajo matrimonio con la señora LUZ ADRIANA PARIAS GAVIRIA, de la cual procrearon a sus hijos EDID YURLIER BURITICA PARIAS, EIDER SANTIAGO BURITICA PARIAS, YEFERSON BURITICA PARIAS, los cuales han padecido grandes sufrimientos al ver a su esposo y padre sometido a operaciones con anestesia general; cada que sale el señor JESÚS EMILIO ellos sienten una amenaza constante de poderlo perder, ver a su padre con grandes padecimientos y sufrimientos sin poder hacer nada para remediarlo.

Con fundamento en lo anterior, deprecaron *que* se declarara que LUIS ADRIANO OROZCO BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No 71.660.423 y NÓDIER MONICA GONZÁLEZ BENAVIDES, son civil y solidariamente responsables de responsabilidad civil extra contractual, del accidente ocurrido el 13 de abril de 2016 en la Carrera 42-193 del municipio de Itagüí (Antioquia).

En consecuencia, se les condenara a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de la víctima, las siguientes sumas de dinero: Por daño emergente \$8.000.000, por lucro cesante consolidado \$13.350.424,85 y por lucro cesante futuro \$61.882.284. Del mismo modo, \$30.000.000 por perjuicios morales y \$ 20.000.000 por daño a la vida de relación.

Para la cónyuge Luz Adriana Parias Gaviria, \$20.000.000 por perjuicios morales y \$10.000.000 por daño a la vida de relación; y para cada uno de los hijos Edid Yurlier Buriticá Parias, Eider Santiago Buriticá Parias, Yeferson Buriticá Parias y Miguel Ángel Buriticá Parias, \$20.000.000 por perjuicios morales y \$10.000.000 por daño a la vida de relación.

Solicitaron que la condena fuera actualizada para el momento del pago, e igualmente se condenara en costas a los demandados.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Una vez integrado el contradictorio, los demandados contestaron la demanda y propusieron las siguientes excepciones de mérito:

NODIER MÓNICA GONZÁLEZ BENAVIDES:

- INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR FALTA DE NEXO CAUSAL, porque como se pudo determinar del trámite contravencional la motocicleta circulaba por un lugar indebido, LA BERMA, que está definida para la circulación de peatones, semovientes, estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia, y claramente la motocicleta conducida por el demandante no estaba habilitada para transitar por la berma; por tanto, obrando adecuadamente dentro de las normas de circulación y en ejercicio del principio de confianza legítima, realizó el giro que para ella era permitido, por lo que no se puede considerar que de su actuar se derive algún nexo causal con el daño reclamado. Refirió que es así entonces como claramente se encuentra rota la relación de causalidad entre el hecho de conducir un vehículo por la vía pública cumpliendo las normas, y el accidente sufrido por Buriticá y sus lesiones.

- **CULPA EXCLUSIVA DE VICTIMA**, en tanto que, de acuerdo como ocurrieron los hechos y soportados en las declaraciones de testigos, y en el proceso contravencional, fue la víctima quien se expuso imprudentemente al daño, toda vez que él mismo fue quien al no conducir adecuadamente, sin tomar precauciones necesarias, por circular por un lugar que no es el permitido para ello, invadiendo la berma y utilizándola como vía de circulación causó el accidente con las consecuencias ya conocidas. Advirtió que claramente en este proceso una persona que, sin tomar las debidas precauciones, se expuso claramente a la ocurrencia de un accidente.
- **COLISION DE ACTIVIDADES PELIGROSAS. ANULACIÓN DE PRESUNCIONES.** Pues cuando se presenta un daño a un tercero en el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, la responsabilidad se configura a la luz de las actividades peligrosas. Dijo que tanto la doctrina como la Honorable Corte han sido reiterativas en manifestar que cuando se da una colisión de actividades peligrosas, no se analizan a la luz de la responsabilidad presunta de quien ejerce este tipo de actividades, las presunciones de culpa en posición de la Corte o de responsabilidad como lo plantean algunos tratadistas, se desvirtúan o aniquilan entre los participantes de la actividad peligrosa, debiendo la parte que ejerce la pretensión, probar, no sólo la conducta, el daño y el nexo de causalidad, sino también la culpa correspondiente a la conducta. En su sentir, es por ello que la parte actora debe demostrar una culpa por parte de los demandados, quienes por el contrario obraron con diligencia y cuidado, y de no lograr hacerlo claramente, no habrá lugar a imputar responsabilidad de ninguno de los demandados.

- **REDUCCION DEL MONTO INDEMNIZABLE.** Toda vez que el conductor de la moto fue quien imprudentemente se expuso al daño y es por eso que se debe tener en cuenta que igualmente la impericia de éste al maniobrar su motocicleta, fue determinante y la única causa en la ocurrencia del accidente, toda vez que pudo haber conducido adecuadamente, haber circulado sin tomar este tipo de riesgos, y en esta actividad, puso en riesgo su vida. Por ello, y en razón a la participación en el resultado de parte de la víctima, solicitó al despacho se sirva tener en cuenta la reducción del monto indemnizable establecido en el artículo 2.357 C.C.
- **EXCESIVA TASACION DEL PERJUICIOS.** Ya que las acciones de Responsabilidad Civil, no pueden constituirse en fuente de enriquecimiento para quienes las invocan. Por lo tanto, peticionó al despacho, en el evento hipotético de que se deban liquidar perjuicios a favor de los demandantes, tasar en equidad los perjuicios solicitados, sin que ello se constituya en una fuente de enriquecimiento para los demandantes.
- **IMPROCEDENCIA DE PERJUICIOS INMATERIALES A TITULO DE DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE REBOTE.** Bajo el entendido de que la jurisprudencia nacional ha sido lo suficientemente clara al indicar, que el daño a la vida de relación, hoy indicado como daño a la salud, indica el daño que sufre la víctima directa por no poder realizar sus actividades normales de vida, esto es los cambios que sufre en su vida cotidiana, pero igualmente ha sido clara la jurisprudencia en indicar que dicho perjuicio solo procede para la

víctima afectada directa, no para los afectados indirectos, pues éstos no varían sus condiciones de vida.

- **EXISTENCIA DEL CONTRATO DE SEGURO.** El vehículo involucrado en el accidente de tránsito que da ocasión a este proceso, se encontraba asegurado en la póliza de seguro N° 5488277, expedida por Seguros Generales Suramericana S.A. con un amparo de responsabilidad civil extracontractual, el cual tiene una cobertura máxima fijada en la carátula de la póliza.
- **GENERICA.** La cual debe declararse si se encuentra probada en el desarrollo del proceso.

Del mismo modo, llamó en garantía a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., con base en la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- **ANIKUILACIÓN DE PRESUNCIONES POR EJERCICIO DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.** Porque al momento del accidente todos los implicados ejercían actividades peligrosas, razón por la cual, el demandante debe acreditar suficientemente el hecho, la culpa, el daño y el nexo de causalidad.
- **CULPA EXCLUSIVA DEL DEMANDANTE.** consistente en que la causa del desafortunado y lamentable accidente de tránsito fue la maniobra imprudente y antijurídica del motociclista, sin observar el comportamiento que le era exigible, conforme al actual Código Nacional de Tránsito y Transportes. En efecto, dentro del proceso

contravencional adelantado por el INSPECTOR DE CONTRAVENCIONES DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ, fue proferida la resolución Nro. 4064 del 18 de Julio de 2016, en la cual fue declarado contravencionalmente responsable el demandante JESÚS EMILIO BURITICÁ GALLEGO, por infringir el artículo 96 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002, en concordancia con el artículo 131 inciso 24.

- **REDUCCIÓN DEL MONTO INDEMNIZABLE POR CONCURRENCIA DE CULPAS.** Para que se tuviera en cuenta que la víctima se expuso imprudentemente al daño, participando de manera directa en su causación, por tanto, al tasar una eventual indemnización, la misma debe reducirse en la misma proporción en que el afectado participó en la producción del daño, dando así aplicación plena a la norma citada.
- **INDEBIDA Y EXAGERADA TASACIÓN DE LOS PERJUICIOS.** Toda vez que los perjuicios solicitados por el demandante, deben ser probados al interior del proceso, los mismos no se presumen, por lo que se opone a la autovaloración del daño hecha por la parte actora respecto de los mismos, advirtiendo, en todo caso, que en lo que respecta a la tasación del perjuicio extrapatrimonial es de resorte del juez, y está sometido a la existencia de medios probatorios que den cuenta del origen, existencia y extensión de los mismos.
- **COMPENSACIÓN.** En el caso totalmente hipotético en que llegare a determinarse que le cabe la responsabilidad frente a la demanda

de indemnizar los perjuicios que se alegan, solicitó que se declarara que el pago de perjuicios se realizó por cualquier otro medio de indemnización que haya cubierto al demandante, en especial por el seguro obligatorio del vehículo y cualquiera otro seguro o medio de asistencia social o particular, y que en caso de que la liquidación de los perjuicios arroje un total mayor que dichos pagos, se aplique la compensación acorde con lo regulado en la materia, según el origen de los perjuicios y el de los pagos.

- **EXCLUSIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES.** Porque en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el artículo 1056 del Código de Comercio establece que, con las restricciones legales, el asegurador podrá limitar contractualmente los riesgos que asume bajo el contrato de seguro. Estos límites pueden ser territoriales, temporales y materiales.
- **VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.** Ya que la póliza de seguro de autos SURA Plan Auto Global Nro. 5488277-6, vigente para el día 13 de abril de 2016, para el vehículo de placas DLY209, tenía un límite o suma asegurada para el amparo básico de Responsabilidad Civil Extracontractual, establece el valor asegurado para cada uno de los amparos. Dicha suma asegurada señalada en la carátula, limita la responsabilidad de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. ya que es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar los perjuicios patrimoniales y/o

extrapatrimoniales que se causen por la muerte o lesiones a las personas o daños a bienes de terceros.

- **DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA.** Para que, en caso de que efectivamente el presente reclamo llegue a tener cobertura por la póliza de seguro de autos SURA Plan Auto Global Nro. 5488277-6, vigente para el día 13 de abril de 2016, para el vehículo de placas DLY209, la aseguradora solo responderá siempre y cuando exista, para la fecha del fallo condenatorio, disponibilidad del valor asegurado.
- **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y LOS CODEMANDADOS.** Toda vez que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. no tuvo ninguna injerencia en el accidente a que hacen alusión los hechos de la demanda. Dicha aseguradora tuvo una relación contractual con FERNEY ALBERTO CARVAJAL GIRALDO, por medio de la cual asume los riesgos mediante póliza de seguro de autos SURA Plan Auto Global Nro. 5488277-6, vigente para el día 13 de abril de 2016, para el vehículo de placas DLY209, por la responsabilidad civil extracontractual en que llegue a incurrir, conforme las definiciones, límites, amparos y exclusiones de la póliza.
- **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN QUE SE DERIVA DEL CONTRATO DE SEGURO;** argumentando que, sin que la proposición de esta excepción constituya aceptación de obligación alguna de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., propuso esta excepción para todo lo demandando y para el

llamamiento en garantía, en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, consistente en el paso del tiempo sin haber ejercido la acción para hacer efectiva la póliza.

LUIS ADRIANO OROZCO BEDOYA.

Se pronunció en similares términos a los presentados por Nódier Mónica González, ratificando lo por ella manifestado e insistiendo en las excepciones propuestas.

Así mismo, llamó en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A., con base en la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual.

1.3. DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y SU CONTESTACIÓN.

Los demandados llamaron en garantía a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., con base en el contrato de seguro número 5488277, póliza que otorga cobertura en el amparo de responsabilidad civil extracontractual, tanto al propietario como al conductor del vehículo de placas DLY209.

Una vez notificada, la llamada en garantía propuso como excepciones, las que denominó:

- EXCLUSIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA SEGURO

DE AUTOMÓVILES. Porque la póliza de seguro de autos SURA plan auto global Nro. 5488277-6, vigente para el día 13 de abril de 2016, para el vehículo de placas DLY209, además de los amparos y coberturas, contiene EXCLUSIONES, las cuales deben ser analizadas y aplicadas íntegramente por el Despacho al momento de dictar sentencia, de resultar cualquiera de ellas probada al interior del proceso.

- **VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.** Para que se tenga en cuenta que la póliza de seguro de autos SURA Plan Auto Global Nro. 54882776, vigente para el día 13 de abril de 2016, para el vehículo de placas DLY209, tenía un límite o suma asegurada para el amparo básico de responsabilidad civil extracontractual, es decir, establece el valor asegurado para cada uno de los amparos.
- **DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA.** Ya que solo respondería siempre y cuando exista, para la fecha del fallo condenatorio, disponibilidad del valor asegurado.
- **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Y LOS CODEMANDADOS.** Reiterando que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. no tuvo ninguna injerencia en el accidente a que hacen alusión los hechos de la demanda.
- **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN QUE SE DERIVA DEL CONTRATO DE SEGURO.** Sin que la proposición de esta excepción constituya aceptación de obligación alguna de

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., propuso esta excepción para todo lo demandando y para el llamamiento en garantía, en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, consistente en el paso del tiempo sin haber ejercido la acción para hacer efectiva la póliza.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Evacuado el período probatorio y los traslados para alegar de conclusión, el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, luego de constatar que se reunían los presupuestos para proveer de fondo y que no acaecía causal de nulidad que invalidara lo actuado, puso fin a la primera instancia, desestimando las pretensiones de los demandantes, a la vez que se desestimó las pretensiones formuladas por los codemandados en acción revérsica en contra de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, por ausencia de presupuestos axiológicos de la pretensión.

Consideró el *a quo* que en este caso no se había acreditado el nexo causal, presupuesto axiológico de las pretensiones, debido a una culpa exclusiva de la víctima, pues este propició su propio daño al violar normas de tránsito. Esencialmente basó su decisión el A-Quo en el hecho de que el motociclista transitaba por la berma y fue él quien chocó contra el vehículo conducido por la demandante cuando esta giraba a su derecha, siendo entonces la víctima quien aportó la causa suficiente para el resultado dañoso. En su análisis no encontró de recibo el dicho testimonial de la señora BEATRIZ, y además enrostró varias inconsistencias al dicho del demandado.

1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Dentro de la audiencia, el apoderado de los demandantes formuló recurso de apelación, exponiendo que la presunción de culpa en contra de los demandados debía ser desvirtuada por ellos, y no como se determinó por parte del Juzgado de primera instancia, además, porque las pruebas no se pueden analizar de manera fraccionada, solo teniendo en cuenta lo que conviene para fundamentar la decisión. Fundamentó la impugnación en el hecho de que las pruebas se encontraban indebidamente analizadas.

Como sustentación en segunda instancia, el apoderado de la parte demandante señaló que en el proceso está claro que las lesiones físicas sufridas por la víctima, así como su incapacidad parcial para trabajar, son consecuencia directa de la ocurrencia del accidente, por lo cual, hay prueba del nexo de causalidad que une al hecho con la causa final, es decir con las lesiones padecidas por la víctima. Cosa distinta sería la apreciación de que en el proceso se hubiere demostrado el rompimiento de ese nexo de causalidad mediante la demostración de una causa extraña.

Expresó que habiendo concurrencia de actividades peligrosas y existiendo en el proceso solo una víctima y solo una pretensión declarativa de responsabilidad civil formulada por esta, el régimen de responsabilidad no cambia o varía en el presente caso, estando la parte demandada en la obligación de probar una causa extraña para exonerarse de responsabilidad, pues aun existiendo colisión de actividades peligrosas, sigue pesando sobre el demandado la obligación de demostrar una causa

extraña para lograr su exoneración; por tanto, la apreciación del juez en incorrecta, en cuanto a que la parte demandante debía probar la incidencia causal que su actividad había tenido en el hecho dañoso.

Señaló que la conclusión de que el responsable del daño es la propia víctima es por entero contraevidente y responde a una incorrecta valoración de la prueba allegada al proceso.

Adujo que, si bien el Juez había afirmado que habían seis contradicciones en la declaración del demandante, y que la prueba permitía concluir que el demandado circulaba por la berma de la vía, y que, por tanto, si el demandante no circulaba por esta parte de la vía no se habría producido el accidente, también era posible afirmar que si la demandada Nodier Mónica González no hubiera hecho el giro a la derecha que originó el accidente, o si no hubiere circulado por esa parte de la vía, no se hubiera producido el accidente. Dijo que el argumento del juez de primera instancia se cae por su propio peso, pues se sustenta en una teoría causal que si bien explica la forma en que ocurre el hecho dañoso, no alcanza a explicar la causalidad jurídica que es la categoría conceptual que debe sustentar la decisión judicial.

Advirtió que en este proceso quedó probado, con confesión de parte de la demandada, que ella circulaba por la vía y que solo faltando tres o cinco metros accionó las direccionales del vehículo para girar a la derecha, confesión que pone en evidencia que la demandada incurrió en una culpa normativa al accionar las direccionales y girar de manera intempestiva, poniendo en claro riesgo a los otros actores viales que circulaban en la vía, peligro que se concretó en la persona del demandante que, circulando por

la vía, no tuvo ocasión de reaccionar al giro inesperado de la señora demandada.

Agregó que la demandada no podía en el lugar en que ocurrió el accidente girar hacia su derecha, pues había en la vía una raya blanca continua que le impedía a los conductores hacer una maniobra de estas y les exige continuar la marcha hacia adelante. Así mismo, hay también una señal en el piso, que se advierte en el mismo croquis que levantó la autoridad de tránsito en el lugar de los hechos, señal que indica que los conductores no pueden hacer giro a la derecha, sino que deben continuar la marcha hacia adelante. Que el juez limitó su juicio a la conducta del demandante, sin considerar la conducta de la demandada que fue claramente imprudente al girar a la derecha sin avisar previamente la conducta que realizaría, además por que dicha maniobra le era prohibida conforme a lo que se ha sostenido en líneas precedentes.

Adujo que, aun entendiendo la ocurrencia de los hechos en la forma en que lo hizo el juzgador de primera instancia, es decir aun considerando que la víctima transitaba por la berma de la vía, el hecho dañoso no puede imputarse a su autoría, pues lo cierto es que la conducta que causalmente determinó la ocurrencia del daño fue la conducta de la demandada que giró a la derecha de manera inesperada, en un sitio prohibido, para hacerlo conforme a las diferentes señales que aparecen relacionadas en el informe de accidente de tránsito.

De otro lado, manifestó que la remisión que hace el juez a la actuación adelantada ante la autoridad de tránsito es incorrecta, pues se remite a la conclusión que hace la autoridad de tránsito, desconociendo que en esa instancia administrativa no se hizo ninguna valoración fáctica de lo

ocurrido y desconociendo, sobre todo, la informalidad y falta de técnica que suelen observarse en este tipo de trámites.

Arguyó que no debió desestimar de plano por parte del juez de primera instancia, la declaración de la testigo presencial de los hechos, considerando que la declaración no era merecedora de credibilidad, dado que la testigo no pudo ubicarse geo-espacialmente en el lugar de los hechos, además de reprocharle haber sido imprecisa en sus dichos, puesto que, las imprecisiones que son normales al considerar que la testigo estaba hablando del recuerdo de un hecho que presenció cuatro años y medio atrás, además de que no era fácil ubicarse en una imagen tomada del google de la que no se tenía certeza de si era una foto real del día de la audiencia.

Por su parte el apoderado de los demandados NÓDIER MONICA GONZÁLEZ BENAVIDEZ y LUIS ADRIANO OROZCO BEDOYA, dijo que el juez de primera instancia realizó un análisis adecuado que llevó a que desde la fijación del litigio se determinara la existencia de una colisión de actividades, situación ésta que, como se ha definido jurisprudencialmente, lleva a que cada parte tuviera unas obligaciones claramente determinadas en el proceso, reglas definidas en la fijación del litigio, y aceptadas por ambas partes, es así como se determinó que correspondía al demandante probar la causa eficiente del daño en cabeza de la parte demandada, sin que por esto se estuviera modificando el régimen de responsabilidad civil o la jurisprudencia nacional.

Advirtió que, como lo determinó el juez de primera instancia, el demandante Jesús Emilio Buriticá es el único causante del accidente de tránsito que nos ocupa, pues fue él quien aportó la causa determinante para

el accidente y el daño, rompiendo de manera clara y determinante el nexo causal, al encontrarse demostrada la culpa exclusiva de la víctima; máxime que las pruebas aportadas al proceso y debidamente analizadas por el juez, indican de manera concluyente que el demandante Jesús Emilio Buriticá circulaba por la berma, lugar prohibido para la circulación de vehículos, y que fue su actuar negligente y violatorio de las normas el que causó el accidente de tránsito, entonces fue él y solo él quien se expuso indebidamente a causar el accidente.

Expresó que el apoderado de la parte demandante trata de indicar que la señora Nódier Mónica González Benavidez incurrió en una infracción de tránsito al girar a la derecha, situación que no está probada, y que, por el contrario, la autoridad de tránsito dejó claro la inexistencia de dicha supuesta infracción. Dijo que el giro realizado por la demandada es permitido y solo trata el demandante mediante falsas afirmaciones, inventar una supuesta infracción de la demandada al realizar un giro a la derecha, el cual es claramente permitido, tanto para acceder a la calle como para acceder a los establecimientos de comercio ubicados al costado derecho.

Concluyó que era imprevisible e irresistible para los demandados el actuar del demandante, pues si la motocicleta no se hubiera desplazado de esta forma, el accidente no se hubiera producido. Que todo lo anterior estructura una causa extraña en modalidad de hecho exclusivo de la víctima, situación que rompe el nexo causal, tal y como lo advirtió el juez de primera instancia, mismos argumentos con los cuales el Tribunal debe confirmar la decisión.

El apoderado de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., señaló que, contrario a lo afirmado por el apelante, la jurisprudencia señala que, en casos de colisión de actividades peligrosas, el demandante debe acreditar suficientemente el hecho, la culpa, el daño y el nexo de causalidad.

Y que, no obstante, no era carga de la prueba en cabeza de la parte demandada, en el proceso sí se demostró la CULPA EXCLUSIVA DEL DEMANDANTE, y que consistió en la maniobra imprudente y antijurídica del motociclista JESÚS EMILIO BURITICÁ GALLEGO, sin observar el comportamiento que le era exigible, conforme al actual Código Nacional de Tránsito y Transportes.

Arguyó que en la resolución que definió el trámite contravencional, se encuentra el croquis y las confesiones del demandante en el interrogatorio de parte, en el que señaló que venía transitando por la berma de la vía, es decir, por fuera de los carriles vehiculares; además, fue acertado y ajustado a derecho la decisión del Juzgado, de desestimar el testimonio de la señora BEATRIZ ELENA GARCÍA GARCÍA, por su falta de claridad, sus incoherencias, y lo inverosímil de su versión.

Por ello, deprecó al TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN - SALA DE DECISIÓN CIVIL, confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

2.0. CONSIDERACIONES.

Dentro de las diferentes fuentes de este tipo de responsabilidad, encontramos la tipificada en el Art. 2356 del Código Sustantivo Civil, según el cual todo el que cause un daño en el ejercicio de una actividad peligrosa, está obligado a indemnizar a la víctima, a menos que establezca una causa extraña.

Como tal entendió nuestra máxima Corporación:

“No hay duda, y esto se ha dicho repetidamente, que poner en actividad ciertas cosas o energías cuya capacidad destructora es incalculable, especialmente cuando sobre ellas se pierda el control que se tenía previsto, comporta comprometer el sosiego social y crear un riesgo que debe asumir quien las pone en actividad, sin que éste pueda replicar en su favor que agotó todos los esfuerzos que le fueron posibles para evitar el daño, pues, reitérase, solamente demostrando fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o de un tercero, logra evadir la responsabilidad que se le atribuye.

Desde luego que incontrovertibles mandatos de equidad y justicia imponen deducir que quien - la más de las veces buscando su propio beneficio - cree riesgos o ponga en peligro a los demás, debe asumir la obligación de indemnizar el daño que causa, imputación que se deriva del control que ejerce sobre dicha actividad, esto es el poder de dirección y guarda que de él se predique.

Pero, como su nombre lo indica, trátase del deber de indemnizar los daños causados por la actividad peligrosa, es decir por las cosas o energías que el ser humano pone en acción y que tienen injerencia activa en la causación del perjuicio, no simplemente pasiva o estrictamente incidental, sin proyección alguna en el evento dañoso.”¹

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de Julio 12 de 2005. M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 7676.

Por lo tanto, si el demandado pretende exonerarse de esta presunción de culpabilidad deducida en su contra, está en la imperiosa obligación de acreditar a lo largo del debate que el perjuicio fue la resultante de **un caso fortuito, de fuerza mayor, o de la concurrencia de un hecho extraño dentro del cual se halla la culpa exclusiva de la víctima.**

Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho:

“Sabido es que el artículo 2356 del Código Civil consagra una presunción de culpa que opera en favor de la víctima de un daño causado en ejercicio de una actividad peligrosa, circunstancia que la releva de la prueba de la existencia de la culpa en el acaecimiento del accidente y, por tanto, sólo le basta probar el daño y la relación de causalidad entre éste y el perjuicio para que el autor del mismo sea declarado responsable de su producción.

En tales condiciones, la defensa del autor del daño que pretenda exculparse, para que resulte exitosa, debe plantearse en el terreno de la causalidad, es decir que, le corresponde destruir el aludido nexo causal demostrando que en la producción del suceso medió una causa extraña, vale decir, un caso fortuito o fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el de un tercero.” (Sentencia de Mayo 2 de 2007, con ponencia del Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Expediente número 73268 3103 002 1997 03001 01.)

Esta línea jurisprudencial fue modificada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Agosto 24 de 2009, con ponencia del Magistrado WILLIAM NAMÉN VARGAS, dentro del expediente radicado 11001-3103-038-2001-01054-01, para aludir a una **responsabilidad objetiva** en los daños causados en ejercicio de una actividad peligrosa.

Sin embargo, exactamente un año después, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, retomó el criterio de presunción de culpabilidad en el ejercicio de actividades peligrosas, en la sentencia proferida el 26 de Agosto de 2010, dentro del expediente radicado bajo el número

470013103003200500611-01, con ponencia de la DRA. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA, a la cual le hiciera aclaración de voto el DR. WILLIAM NAMÉN VARGAS.

Razonó así nuestra máxima Corporación:

“Igualmente debe precisarse, que la sentencia de casación de 24 de agosto de 2009, expediente 01054-01, contiene una rectificación doctrinaria, tal como aparece en su motivación y la parte resolutive, circunscrita exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico equivocado que le dio el Tribunal al aspecto atinente a la “concurrency de culpas” en el ejercicio de actividades peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la Sala referente a que éstas se examinan bajo la perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no “objetiva”.

La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero.

Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace muchos años y no existe en el momento actual razón alguna para cambiarlo, y en su lugar acoger la tesis de la responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa que ampara a los perjudicados con el ejercicio de actividades peligrosas frente a sus victimarios les permite asumir la confrontación y el litigio de manera francamente ventajosa, esto es, en el entendido que facilita, con criterios de justicia y equidad, reclamar la indemnización a la que tiene derecho.

La interpretación judicial de la Sala que se ha consignado en innúmeros fallos de la Corte, emana del texto mismo del artículo 2356 del Código Civil cuando dispone que “por regla general todo

daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”, *lo que significa sin lugar a dudas que los calificativos de la conducta del actor enmarcan dentro del sentido más amplio de lo que debe entenderse por el accionar culposo de una determinada persona en su vida social y en las relaciones con sus semejantes cuando excediendo sus derechos y prerrogativas en el uso de sus bienes o las fuerzas de la naturaleza causa menoscabo en otras personas o en el patrimonio de éstas.*

Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el mero daño que se produce ni el riesgo que se origina por el despliegue de una conducta calificada como actividad peligrosa la que es fuente de la responsabilidad civil extracontractual de indemnizar a quien resulta perjudicado, sino que es la presunción rotunda de haber obrado, en el ejercicio de un comportamiento de dichas características con malicia, negligencia, desatención incuria, esto es, con la imprevisión que comporta de por sí la culpa.

En adición, no debe pasarse por alto que desde un principio el artículo 2341 del Código Civil se encarga de iniciar el estudio del tema a partir del Título XXXIV del Código Civil, bajo la denominación de “responsabilidad común por los delitos y las culpas”, o sea, la que tiene como su fuente el dolo o las diversas clases de “culpas”, desarrollo con el que destaca como elemento esencial el postulado de la culpabilidad, situación que como es natural acepta salvedades que se construyen cuando se presentan hechos diferentes a los que normalmente tienen ocurrencia, como serían la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

Además, no es posible dejar de destacar que es la propia normatividad prevista en el Código Civil, respaldada por la jurisprudencia de esta Corporación, la que gobierna la materia examinada y a la que forzosamente ha de aplicarse el brocardico latino “lex non omitti incaute, sed quia dictum noluit”, es decir, no es, que la ley haya omitido regular el punto sino que no fue su voluntad que fuera dicho, de donde se concluye que si la intención del legislador hubiera estado encaminada a dejar por fuera el elemento culpa de la responsabilidad extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas, sin duda alguna y muy seguramente habría efectuado tales precisiones conceptuales explícitas en el texto del ya referido artículo 2356 ibídem.

Sin importar cuál de las dos posiciones se acoja, tratándose de daños ocasionados en ejercicio de una actividad peligrosa, en ambas posturas jurídicas, para que el demandado pueda ser exonerado de responsabilidad,

debe acreditar que existe una ruptura del nexo causal por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima o de un tercero.

Ahora, frente a la carga de la prueba en la responsabilidad civil extracontractual, en el evento de concurrencia de actividades peligrosas en accidentes de tránsito bajo la actual posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, corresponde a ambas partes, dado que al no existir presunción de culpas que deban aniquilarse, quien demanda debe demostrar el hecho dañoso, el daño y el nexo causal; a su vez, quien es demandado, deberá demostrar que el hecho dañoso acaeció por fuerza mayor o caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero. En otras palabras, corresponde a cada parte probar la incidencia o no de su conducta de cara a la responsabilidad en la producción del daño, teniendo en cuenta su intervención en la creación del riesgo o de las condiciones para que éste se produjese.

Sobre el asunto de concurrencia de actividades peligrosas, dijo la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC4420-2020, del 17 de noviembre de 2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, expediente con radicado 68001-31-03-010-2011-00093-01, lo siguiente:

Ahora, existiendo roles riesgosos, no hay lugar a una responsabilidad con culpa probada o de neutralización de culpas, sino de una participación concausal o concurrencia de causas. Esto, por cuanto una actividad peligrosa no deja de serlo por el simple hecho de ser protagonista con otra acción de la misma naturaleza.

Sobre el punto ha dicho la Sala que "Si bien en un principio la doctrina de esta Corte resolvió el problema de las concausas o de la concurrencia de actividades peligrosas, adoptando diversas teorías como la 'neutralización de presunciones', 'presunciones reciprocas', y 'relatividad de la peligrosidad, fue a partir de la sentencia de 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-0127, en donde retomó la tesis de la intervención causal.

"Al respecto, señaló: "(...)

La (...) graduación de 'culpas' en presencia de actividades peligrosos concurrentes, (impone al) (...) juez [el deber] de (...) examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos de convicción allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.

Más exactamente, el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro.

Así las cosas, la problemática de la concurrencia de actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de víctima y agente, y en la secuencia causal de las mismas en la generación del daño, siendo esa la manera de ponderar el quantum indemnizatorio.

En tal caso, entonces, corresponde determinar la incidencia del comportamiento de cada uno de los agentes involucrados en la producción del resultado, para así deducir a cuál de ellos el daño le resulta imputable desde el punto de vista fáctico y, luego, jurídico. Como se dijo en el precedente antes citado, valorar la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del afectado, establecer su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal"..."

3.0. CASO CONCRETO. PROBLEMA JURÍDICO

Como se advirtió en los considerandos, la reciente postura de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la concurrencia de

actividades peligrosas, conlleva a que necesariamente deba indagarse sobre cada una de las conductas desplegadas por los implicados en el hecho, valorándolas y ponderándolas de acuerdo a las reglas propias que gobiernan cada caso en particular, esto es, determinar su eficiencia en la producción del daño, esto es, si la conducta del agente fue la causa eficiente de éste, o qué grado de incidencia en él ha de atribuírsele a cada una de las partes, para en determinado momento proceder a la pertinente graduación de la responsabilidad, y por ende, a la respectiva tasación de los perjuicios causados. Tal situación, evidentemente impone a cada uno de los implicados, el deber de probar que el hecho dañoso ocurrió en virtud de la actividad desplegada por su contraparte, es decir, que su actuar fue la causa eficiente en la producción del daño.

Con esta conclusión, fundamentada en la postura reciente de nuestro máximo tribunal sobre la concurrencia de actividades peligrosas, la Sala dilucida el primero de los reparos realizados por el apelante, el cual consideró como el error más protuberante en el que incurrió el señor juez en su sentencia, para advertir que ningún error existió en la decisión de primera instancia, porque como demandante, su carga en este asunto recaía en probar que el hecho dañoso ocurrió en virtud de la maniobra de la parte demandada al momento de conducir su automotor, y que, por tanto, su actuar fue la causa suficiente y eficiente para la producción del daño.

En esa medida, se circunscribirá la Sala a determinar si la sentencia de primer grado se encuentra ajustada a derecho, en el entendido de que el hecho dañoso resultó del actuar del demandante, o, por el contrario, como se afirma en la impugnación, fueron las conductas de la demandada las causas eficientes del daño.

Como primera medida, debemos indicar que, para fundamentar su fallo, el Juez de primera instancia determinó que el demandante se estaba desplazando o realizando una maniobra de adelantamiento en la motocicleta por la berma, siendo un lugar prohibido para ello, con lo que no está de acuerdo el apoderado de los recurrentes, pues en su sentir, ello no fue probado dentro del expediente.

Según nuestro Código Nacional de Tránsito, concretamente en su artículo 2°, la berma se define como: *“parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia”*.

En ese sentido, cuando se ubica una línea blanca continua en el extremo derecho o izquierdo del pavimento, ella delimita el fin de la vía y no se puede rebasarse por ahí, es decir, con esta línea divisoria del pavimento con la berma, lo que busca es impedir el tránsito de vehículos por allí, máxime cuando se aproxima a intersecciones o cruces. Sin embargo, lo normal en este tipo de vías donde existe esta delimitación por una línea, es que esta se vuelve discontinua cuando se llega a una intersección, de manera que los vehículos que se encuentra circulando por la carretera, puedan ingresar allí.

Ahora, de acuerdo a lo elementos materiales probatorios que fueron practicados dentro del proceso, puede concluirse, como lo definió el a quo, que efectivamente el demandante transitaba o estaba adelantando por la berma, lugar prohibido para el desplazamiento de automotores, porque de otra manera, sería inviable la colisión en los términos como fue descrito

en el croquis levantado por el organismo de tránsito, tal y como lo veremos a continuación.

Si se observa el informe policial del accidente de tránsito, donde se muestra la ubicación final de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito que nos ocupa la atención, el que, valga anotar, fue aceptado por las partes, se puede evidenciar que los mismos quedaron dentro de la berma. Además, de acuerdo con los puntos de impacto de los rodantes, esto es, vehículo número 1 de la demandada “*bomper, guardabarro, llanta, rin delantero costado derecho*”, rodante número 2 del demandante, “*tanque, carenaje, retrovisor izquierdo, tacómetro, manubrio, 2 direccionales costado izquierdo*”, lo que demuestra es que existió un impacto al interior de la berma, una vez la demandada realizó el giro hacía la calle que existe en el sector.

Así, la ubicación final de los vehículos, como los puntos de impacto de los mismos, lo que acreditan es que, el motociclista demandante iba transitando por la berma, por tanto, no existió una invasión de carril por parte del vehículo de la demandada. El golpe fue de manera frontal por parte del actor al rodante de la demandada, pues incluso logró seguir su trayectoria para quedar al otro lado del mismo. Es que, si pensara de otro modo, esto es, un impacto frontal por parte de la demandada a la motocicleta del accionante, otra muy distinta sería su ubicación definitiva, y, por ende, los daños de los automotores serían también muy diferentes.

A esa misma conclusión llegó el organismo de tránsito de Itaguí, cuando al proferir la resolución número 4060 del 18 de julio de 2016, sostuvo:

“...se puede concluir que el único contravencionalmente responsable en materia de tránsito, en el caso que nos ocupa, es el

señor JESUS EMILIO BIRITICA GALLEGO identificado con la cedula # 71650590 Conductor (a) No 2, por su falta de pericia en la conducción y debió tomar todas las precauciones necesarias para no impactar el vehículo que circulaba por el carril derecho más el acervo probatorio el despacho concluye que efectivamente el conductor # 2 pretendía adelantar por la derecha en el momento en que la conductora # 1 realizaba el giro a la derecha a pesar que el video no permite observar el momento de la colisión, del croquis del ipat si se puede concluir que según el golpe recibido por el vehículo # 1 y la posición final del # 2 (delante del # 1) necesariamente el vehículo # 1 circulaba adelante cuando fue golpeado por el # 2 quien supuestamente coloco direccionales para girar a la derecha más adelante y no en la intersección donde ocurre la colisión”

Sin duda, la responsabilidad contravencional no implica el advenimiento de una responsabilidad civil, como para tener un fallo contravencional como prueba fehaciente dentro del presente, sin embargo, no existe otra explicación plausible frente a lo probado del presente asunto.

Es más, la misma testigo allegada por la parte demandante, que, aunque en principio confundió los carriles por los cuales se desplazaban los automotores involucrados en la colisión que nos convoca, en últimas confirmó el hecho de que el señor Jesús Emilio Buriticá transitaba por la berma (Minuto 1:12 de la audiencia de pruebas). A lo que se suman, las serias contradicciones e imprecisiones en que incurrió el demandado al momento de rendir el interrogatorio de parte, quien incluso mencionó la existencia de líneas amarillas en una vía unidireccional, desconociendo su significado; contrario a lo advertido en el interrogatorio de la demandada conductora del rodante, quien fue mucho más coherente en sus dichos, lo que hace más creíbles sus respuestas.

Con todo, queda desvirtuada la afirmación que realizó la parte actora en los hechos de la demanda, en el sentido de una fue una supuesta maniobra de adelantamiento que realizó la demandada, la que conllevó a las lesiones sufridas por la víctima. Y en ese sentido, considera la Sala innecesario un

estudio más a fondo de la declaración de la supuesta testigo de los hechos, en tanto en nada variaría la conclusión a la que ha llegado la Sala; máxime que por parte del Juzgador de primera instancia se hizo un vasto análisis del mismo, que evidenció su incoherencia y contradicción en sus manifestaciones.

En un segundo aspecto, alega el apoderado de los impugnantes que la demandada realizó un giro prohibido, pues no podía girar a su derecha en el lugar en que ocurrió el accidente, máxime que existía allí una línea blanca continua que les impedía a los conductores hacer este tipo de maniobras. Frente a esta afirmación hay que significar que, se quedó en ello en simples aseveraciones, pues ningún elemento probatorio se allegó al respecto.

En Colombia existen varios tipos de normas de tránsito, entre las que se encuentran las reglamentarias o prohibitivas, caracterizadas por tener borde de color rojo, símbolos negros y fondo blanco. Estas muestran las limitaciones o prohibiciones para peatones y conductores sobre el uso de vías, por lo que, hacer caso omiso a estas, puede generar una sanción o multas conforme al Código Nacional de Tránsito.

En el caso de marras, no puede concluirse de manera categórica, que existía prohibición de giro a la derecha, puesto que nada se acreditó dentro del proceso, en cuanto a la existencia de este tipo de señal prohibitiva en el lugar de los hechos. Y si se mira el croquis del tránsito, nada quedó descrito frente a la prohibición aludida, la que, de haber existido, tuvo que ser anotada por el agente de tránsito, pues es quien conoce las normas prohibitivas y tiene la experiencia en este

tipo de accidentes, en tratándose de un hecho determinante en la responsabilidad contravencional.

Además, al tenor de lo dispuesto en el artículo 112 del Código Nacional de Tránsito, las zonas de prohibición deben estar expresamente señalizadas y demarcadas en el sitio, por tanto, su inexistencia genera su permisión, es decir, para el caso que nos ocupa, el giro era permitido porque ninguna señalización de prohibición existe en el lugar, o por lo menos, no se evidencia ello.

No obstante, el apelante pretende enrostrar lo contrario, argumentando como una prohibición de giro, la existencia de una línea blanca continua. Este tipo de marcas viables o señales horizontales, son líneas, o símbolos, gráficos o palabras pintados en las calles para indicar, advertir o guiar el tránsito vehicular y peatonal, en los términos del párrafo 1º del artículo 110 de Código Nacional de Tránsito.

En ese sentido, contrario a lo dicho por el recurrente, y como se dijo en acápites anteriores, dicha línea separa la calzada vehicular con la berma, y es continua con la finalidad de que no exista adelantamiento por dicho lugar, pero se convierte en discontinua en los lugares de intersección, que como en este caso, había ingreso a la calle 75. Sería totalmente ilógico y alejado de toda realidad, que existiera una calle que conectara con la autopista sur con los barrios del sector, pero estuviera prohibido su ingreso; es más, que también fuera prohibido el ingreso a los establecimientos de comercio del sector, cuando por allí se encuentran las vías de acceso.

Para corroborar lo aquí afirmado, basta observar la prueba documental de oficio practicada por el Juzgado de conocimiento en la audiencia de pruebas (Minuto 1:10), la cual, valga resaltar, fue controvertida por las partes del proceso, donde se puede verificar que, si bien la línea que separa la calzada con la berma viene continua, se vuelve interrumpida en aquellos lugares donde hay acceso al comercio del sector, concretamente al establecimiento “IDEO” y a la calle 75.

En un tercer aspecto motivo de inconformidad del recurrente, expone que la demandada incurrió en violación de la norma de tránsito, al no anunciar con suficiente anticipación el giro a la derecha que pretendía hacer, encendiendo la respectiva direccional. No obstante, ningún elemento de convicción se aportó al respecto, por el contrario, en el interrogatorio de parte la demandada Nódier Mónica adujo que, si bien en su versión brindada ante el organismo de tránsito había señalado que las había prendido de tres a cinco metros antes del giro, no era muy probable que hubiese sido exacto lo allí dicho, pues es algo que se realiza de manera automática.

Y es que, si bien la demandada dio una versión en el proceso contravencional, para la Sala, este no puede ser tenido en cuenta de manera concluyente y definitiva, porque en el interrogatorio de parte dijo desconocer la distancia con la que había encendido la señalización de giro.

Para la Sala, al haber explicado la demandada las razones por las cuales no podía ser exacta en la distancia del encendido de las direccionales, la cual merece toda credibilidad, por lo difícil de calcular distancias en metros cuando se está circulando en un vehículo, da pie para que no se pueda tener por probada esta circunstancia. La explicación fue plausible,

en razón a que estaba circulando en automóvil por una vía rápida, que mentalmente hace imposible determinar distancias. Además, el demandante tampoco ofreció prueba contundente sobre el particular, siendo esa su carga.

La señal de giro, conocida como luz intermitente, es un dispositivo activado manualmente en el interior de un auto para indicar la dirección en la que un conductor tiene la intención de doblar. En este caso, lo único claro es que la demandada anunció la intención de realizar el giro a su derecha, e iba circulando por el carril autorizado para voltear, esto es, la calzada final, por ende, no podía preverse la aparición de un automotor por su derecha, ya que se trata de un área prohibida para la circulación de automotores.

Ahora, si en gracia de discusión se pensara que la demandada no encendió la direccional de su vehículo, para anunciar el giro a la derecha, en los precisos términos establecidos en el parágrafo 1° del artículo 67 del Código Nacional de Tránsito, en nada alteraría el hecho de que el demandante no estaba autorizado para desplazarse por la berma; es decir, así la accionada hubiere prendido la direccional con 30 o más metros de antelación hacia la calle 75, de todas maneras el accidente hubiere ocurrido, ante la invasión de la berma por parte del actor y su actuar imprudente, que no le permitió incluso reaccionar ante el giro que realizaba la demandada.

En efecto, como esa línea separa la vía de la berma, es decir, muestra el límite del pavimento de circulación de automotores, la direccional se enciende para indicar al vehículo que viene en la parte de atrás su disminución de velocidad para realizar el giro, pero de ninguna manera a

los que se movilizan por allí, pues se repite, no es una zona para tránsito vehicular.

Se reitera, aun cuando se considerara que la señora Nódier Mónica González Benavides, solo encendió la direccional para advertir su giro a la derecha con cinco metros de anticipación, tal como lo afirma la parte demandante en el escrito impugnatorio, tampoco podría considerar esta judicatura que la conclusión a la que se llegó en primera instancia hubiese sido distinta, porque:

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Código Nacional de Tránsito, por la berma está prohibido el tránsito de automotores, y en el caso *sub judice*, de acuerdo con el croquis adunado a la demanda, el señor BURITICA se desplazaba por allí, vulnerando así la citada disposición de tránsito.

Significa lo anterior que, ante la violación de dicha norma de tránsito, la víctima se expuso al daño que le fue ocasionado, y, por ende, la responsabilidad de dicho hecho recae sobre sí mismo y no sobre la parte demandada.

Corolario con lo expuesto, tenemos que, en este caso, contrario a lo argüido por el recurrente, si quedó acreditada la causa extraña, esto es, la culpa exclusiva de la víctima que declaró el a quo, generándose como consecuencia el rompimiento del nexo causal, y, por ende, la exoneración de la parte demandada de la responsabilidad en el hecho dañino.

Corolario con lo expuesto, se CONFIRMARÁ la sentencia dictada por el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE

MEDELLÍN, el 22 de septiembre de 2020, sin condena en costas en esta instancia, ante el amparo de pobreza concedido a los demandantes.

4.0. CONCLUSIÓN.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 22 de septiembre de 2020, dentro del proceso VERBAL (Responsabilidad Civil Extracontractual), instaurado por los señores JESÚS EMILIO BURITICÁ GALLEGO, LUZ ADRIANA PARIAS GAVIRIA, EDID YURLIER BURITICÁ PARIAS, YEFERSON BURITICÁ PARIAS, EIDER SANTIAGO BURITICÁ PARIAS y MIGUEL ANGEL BURITICÁ en contra de NODIER MÓNICA GONZÁLEZ BENAVIDES, LUIS ADRIANO OROZCO BEDOYA y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA.

SEGUNDO: Sin condena en costas a la parte demandante, ante el amparo de pobreza que le fue concedida al interior del proceso.

TERCERO: La presente decisión deberá ser notificada a las partes debidamente.

CUARTO: Devuélvase el expediente digital a su lugar de origen.

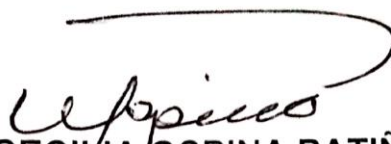
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



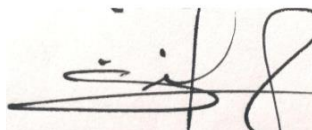
CARLOS ARTURO GUERRA HIGUITA

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO

(Firma escaneada conforme al art. 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)
Utilizada para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

C.U.D.R. 05001 31 03 007 2019 0141 -01